a) Título de la ponencia: *Víctimas en Colombia, muchos conceptos; ninguna solución*

b) Autor: YéniferYuliet Realpe Bravo

c) Dirección electrónica del Autor: Jhennjhu23@gmail.com ; yyrealpe@utpl.edu.ec

d) Si es el caso Institución a la que pertenece el ponente:

Universidad Técnica Particular de Loja, docente - investigador.

f) Resumen equivalente a un folio:

Colombia ha desarrollado diferentes procesos legislación y normatividad transicional, para subsidiar los profundos daños que a su paso ha dejado la violencia socio-política sobre la cual se ha construido el país. Con el particular de que Colombia es emite una “justicia transicional” en medio del conflicto, y no como en otros países que se determina al finalizar sus conflictos, guerras o violencia institucional.

Por lo cual y considerando algunos momentos históricos de profundización de la violencia, relacionándolos con los procesos legislativos de normatividad desarrollada para atender y reparar a las víctimas, se considera que en definitiva; en *Colombia, son muchos conceptos pero no existe ninguna solución.*

Víctimas en Colombia, muchos conceptos; ninguna solución

Por: Yénifer Yuliet Realpe Bravo¹

“¡Hay que defender la persona!...
Se convirtió en una consigna de los que propugnaban el libre mercado,
los que separan la vida cotidiana de la política, del Estado y de la ciencia.”
Rafael Polo - LA LECCIÓN DEL ANTI-HUMANISMO

1. Violencia en Colombia

La historia política y social de Colombia ha estado marcada por la violencia desde su independencia en 1810, hasta la actualidad. Éste país ha sido protagonista de sucesivas guerras domésticas, problemas de conflicto interno, guerra de guerrillas; de la misma manera que ha tenido de problemas sociales como la delincuencia común y el narcotráfico. Situación que ha referido una preocupación central sobre las causas de la misma así como los efectos de la violencia, y por determinar los actores que la sostienen.

Éste esfuerzo académico, político y social no ha tenido un resultado notable en las disposiciones para enfrentar ni los efectos ni las causas de la violencia. Lo que se puede explicar en la consideración de Elsa Blair, al citar a Thomas Platt, “a medida que aumenta la gama de significados de un término, su fuerza descriptiva se contrae”. Por lo cual sugiere Blair, que en Colombia, probablemente es lo que ha pasado, donde -por lo extensivo de su uso – la palabra violencia cada vez significa menos (Blair, 2009).

Ahora bien las diferentes maneras de infringir violencia en Colombia por la diversidad de conflictos internos existentes como sucesivas guerras domésticas, la existencia de grupos alzados en armas al margen del Estado, es decir guerrilla, paramilitares, como también el problema existente de delincuencia común y el narcotráfico,

¹ *Filósofa - Universidad del Cauca*
Politóloga - Universidad del Cauca
Diplomado en Derechos Humanos y Conflicto Armado – Universidad del Cauca
Magíster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Política y Cultura, Universidad Andina Simón Bolívar
– Sede Quito

han generado que la violencia como fenómeno tenga una multiplicidad posible de abordarla y por medio de cada uso de ella, sea caracterizada aunque no definida (Blair; 2009).

Enrique Neira², reflexiona entorno de la violencia y los tipos de violencia en Colombia, y en su artículo “*Colombia un caso intrincado de violencia*”, sistematiza bajo los actores que ejercen violencia una descripción de cómo ha sido éste fenómeno en dicho país.

Dice Neira, “El Estado colombiano está sometido a una triple tenaza y a un fuego cruzado que proviene de la guerrilla, de los paramilitares y del narcotráfico”. Cada uno de éstos actores genera distintos tipos de violencia, las cuales en su concepto se retroalimentan. Cuando explica el caso de las guerrillas resalta que se debe hablar de las guerrillas en plural, por las diferencias tanto en la composición social, la base ideológica, el tipo de proyectos que contiene así como diferencia en las tácticas militares y de movilidad.

Estos grupos subversivos, al margen de la ley, legitiman un accionar bélico y terrorista en el país, los éstos, se justifica también la intervención en política interna de Estados Unidos, y un accionar intenso de ataque por parte de las fuerzas armadas nacionales, en cada gobierno de turno. Lo cual se puede evidenciar desde las campañas electorales con discursos y propuestas de los candidatos, que plantean la solución del conflicto armado, señalando a las guerrillas como sus originarios, hasta con los planes de seguridad implantados, como es el caso de la política de seguridad democrática, del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez³, y la Zona de Distensión del ex-presidente Andrés Pastrana, para mencionar dos casos.

² Enrique Neira, “Colombia un caso intrincado de violencia”, Revista Nueva Sociedad N° 105, 1990. Consultado en http://www.nuso.org/upload/articulos/1840_1.pdf, en Marzo de 2011

³ Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de la República de Colombia, 2002-2010.

En relación con la política de seguridad democrática⁴, el gobierno de Uribe estuvo marcado por el incremento de efectivos en las fuerzas armadas colombianas, dado que ésta política promulgaba el fortalecimiento de la actividad y presencia de las fuerzas armadas colombianas a lo largo del territorio nacional (por ende la ampliación de recursos y medio para ejercer violencia), así como el involucramiento directo de sociedad civil en el conflicto nacional. Para éste último fin creó redes de cooperantes, soldados campesinos y el aumento del presupuesto asignado a la defensa nacional.

Andrés Pastrana⁵, en su gobierno (1998-2002), inicia negociaciones de paz, con la guerrilla de las FARC, y para la garantía de estas negociaciones despejó de fuerza pública tres municipios del Meta, a ésta zona se le conoce como Zona de distensión, o el Caguán, la cual inició en noviembre de 1998. Pero paralelo a éste proyecto, Pastrana en alianza con el gobierno de Clinton de Estados Unidos sella el pacto, “*Plan Colombia*”⁶, el cual en contrariedad de las negociaciones con la guerrilla, propicia el fortalecimiento de las fuerzas armadas colombianas, para combatir la guerrilla y el narcotráfico. El Plan Colombia, eleva a problema de seguridad nacional el narcotráfico, concentrando mayores esfuerzos y recursos para su ataque, elevando así el nivel de violencia colectiva. Durante este gobierno se crea el Escuadrón Móvil Antidisturbios⁷, como grupo especial de apoyo para repeler y contener multitudes, con el fin de evitar que manifestaciones o demás actividades se tornen violentas, “pero han generado más demandas de violación de derechos humanos”⁸. Para

⁴Varios Autores; “I. La política de defensa y seguridad democrática”, en Política de Defensa y Seguridad Democrática, Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, República de Colombia 2003, consultado Junio de 2011 en http://www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf”.

⁵ Andrés Pastrana Arango, ex presidente de la República de Colombia, 1998-2002

⁶ Gonzalo de Francisco; “El plan Colombia y la Paz”, consultado Junio de 2011, en http://www.ideaspaz.org/eventos/download/haciendo_paz_02.pdf .

⁷ ESMAD, Escuadrón Móvil Anti Disturbios, grupo especial de la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC) de la Policía Nacional de Colombia.

⁸ El rebelde medios alternativos “Esmad: violencia ante la protesta”, en Desde abajo la otra posición para leer, Jueves 19 de Mayo de 2011, Edición 169 , Consultado en Junio de 2011, <http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/221-edicion-169/9441-esmad-violencia-ante-la-protesta.html>.

poner sólo un caso, el asesinato a manos de los miembros del Esmad de Nicolás Neira⁹, estudiante de 15 años quien participaba de una manifestación por los derechos de los trabajadores el 1 de mayo de 2005. En un momento por la cantidad de gas lacrimógeno, sumado a su asma, el estudiante se detiene, y es golpeado a traición por 8 miembros del Esmad, produciéndole fracturas múltiples en el cráneo. En la actualidad su padre, Yuri Neira es perseguido y amenazado por exigir justicia legal y haberse convertido en un activista social, después del vil asesinato de su hijo.

En relación con los ejércitos paramilitares describe el autor, que estos grupos estaban financiados por los carteles de la droga, esmeralderos, y algunos terratenientes. Se resalta que sobre 1989, pretendían su vinculación a la política nacional consolidándose como partido político, definido como de extrema derecha. Estos grupos o actores han infringido los peores tipos de vejámenes sobre sus víctimas, han sembrado el terror en el total del mapa colombiano. En complemento de lo expresado por el autor sobre estos grupos, cabe mencionar que siendo AUC (Autodefensas unidas de Colombia), recibieron también el apoyo de políticos, militares y personas del común que concordaban con sus propósitos (Se considera que su intención primera era contrarrestar el accionar de guerrillero, sobre todo entre ganaderos).

Cuándo se denominan paramilitares, luego de la relativa “desmovilización de las AUC”, continúan ejecutando masacres, desplazamientos masivos, infundiendo terror, también en alianza directa con algunos gobiernos, la policía nacional y el ejército militar,

⁹ Pueden ser revisados los reportajes del programa Contravía, Brutalidad policial en <http://www.youtube.com/watch?v=aNUDwo62ag8&feature=related>, o también noticias publicadas como - El espectador, “Muerte de Nicolás Neira motiva destitución de agentes del Esmad”, Publicado el 4 de Enero de 2010, El Espectador.com, Colombia, consultado en Abril de 2011, en <http://www.elspectador.com/noticias/judicial/articulo180315-muerte-de-nicolas-neira-motiva-destitucion-de-agentes-del-esmad>, - Agencia de prensa rural, “Policía asesina a menor de edad en Bogotá”, Publicado el 7 de Mayo de 2005, Bogotá, consultado en Marzo de 2011 <http://www.prensarural.org/casonico20050507.htm>

como se denuncia en una nota de Aporrea.org y como se puede corroborar también con el escándalo colombiano de la “*para-política*”: “Cientos de miles de desplazados ha generado la violencia paramilitar en Colombia. La peor catástrofe humana en América del sur. Ministros, senadores, alcaldes y gobernadores aliados de Uribe están siendo procesados por ser parte de esta empresa genocida y criminal. Senadores de izquierda han denunciado, con pruebas en la mano, nexos entre el Presidente Uribe Vélez y estos asesinos. Sin embargo, el imperio norteamericano ha certificado al gobierno de Uribe por sus "avances en el respeto a los derechos humanos"”¹⁰

Dice Francisco Enrique Villalba Hernandez, paramilitar preso en La Cárcel La Picota, que “las pruebas de coraje” aplicadas a los nuevos reclutas de sus cuadrillas, era descuartizar a personas vivas¹¹.

Sobre la violencia por los carteles del narcotráfico, expresa Neira que la violencia de éstos grupos, ejecutaban las formas más abominables de violencia. En relación con lo cual, se debe tener en cuenta que la fecha del artículo es 1990. Momento en el cual en Colombia, aún se libraba la guerra sin cuartel de los grandes carteles de la droga, y que se minimiza luego del desmantelamiento (captura de cabecillas) del Cartel de Medellín y del cartel de Cali, más o menos entre 1990 y 1995. En la actualidad siguen actuando otras células o grupos de narcotraficantes, se han generado redes y relaciones a través de los estupefacientes impactando en la economía subterránea colombiana, y la sociedad en general. Se habla de la narco-político, la narco – guerrilla, el narco-paramilitarismo y a su vez, las relaciones que estos establecen con el ejército y la policía nacional, profundizando así las enmarañadas redes de violencia existentes.

¹⁰ Paramilitares en Colombia: "parte del entrenamiento era picar campesinos vivos" Nota aporrea. Publicado por Diario el Tiempo, 24 de Abril de 2007, Consultado en <http://www.aporrea.org/internacionales/n93767.html>, en Mayo de 2011.

¹¹ *Ibíd.*

Otro foco de violencia colombiano, según destaca Neira, es de la delincuencia que se confunde con los usos y formas de violencia generados por anteriores grupos descritos.

Según Neira, luego de ésta digresión sobre la violencia en Colombia, afirma que la “La violencia en Colombia es desinstitucionalizada y ajena a los organismos de control del Estado” anota también que “aunque haya habido casos individuales en la policía y en las FFAA de miembros envueltos en actividades delictivas, casos que han sido repudiados y castigados por las mismas instituciones militares.” Sugiere que debe analizarse más como una guerra sucia que como una guerra interna política.

Frente a lo cual (sin demeritar el análisis de éste autor), se disiente en tanto la violencia política del país en general ha estado manipulada desde los gobernantes por medio de las relaciones cercanas con paramilitares y narcotraficantes, como se menciona en otra parte del texto, la parapolítica, la narcopolítica y la inclusión de la guerrilla dentro de determinaciones gubernamentales como también por la falta de presencia u omisión del Estado colombiano, lo cual puede considerarse como violencia. (Véase publicaciones de La Corporación Nuevo Arcoiris Colombia, como “*Y refundaron la patria... De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado Colombiano*”, “*Parapolítica, La Ruta de la expansión paramilitar y acuerdos políticos*”, entre otras.) Cabe mencionar también la colaboración entre policía y paramilitares, como de militares y paramilitares, y de narcotraficantes y paramilitares, en masacres perpetradas a comunidades campesinas e indígenas por control de territorios (Véase “*A las puertas del Ubérrimo*”, de Iván Cepeda y Jorge Rojas).

Para situar otro caso expresa Martha Bello en su artículo denominado “*El desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital y exclusión social*”: “La historia colombiana ha estado caracterizada por violentos procesos de despojo y de expulsión de población indígena, negra y campesina. Este pareciera ser el mecanismo de adecuación a las necesidades de producción y acumulación que el capitalismo impone y la estrategia de dominación de los diversos sectores que disputan el poder. Lejos de obedecer a un modelo de desarrollo pensado en función de los intereses de la nación colombiana, los

movimientos migratorios, la mayoría de ellos involuntarios y violentos, obedecen a las necesidades e intereses de quienes han detentado el poder sobre la tierra, el poder político y a los intereses de capitales nacionales y transnacionales”.¹²

Por la misma línea se considera que Neira, no analiza el caso de la violencia cultural sostenida en Colombia a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, en las cuales recaen distintos tipos violencia y son las poblaciones más vulnerables dentro del conflicto colombiano, cabe anotar también que como son los grupos demográficos que más desplazamiento forzado registran.

Además de las determinaciones legislaciones lesivas para los intereses de éstas comunidades, en el caso de los campesinos e indígenas las normativas del ANUC – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- y el INCORA, - Instituto Colombiano de Reforma Agraria- (Organizaciones institucionales, estatales), por medio de las cuales los territorios son asignados por el Estado y comprados por los campesinos, sobre la mitad de su costo, en el caso de los indígenas, debían declararse campesinos, desconociendo su situación social, cultural, histórica ancestral e identitaria, so pretexto de su inclusión en la entrega de sus propias tierras, con lo que efectúa el Estado una desintegración de resguardos y cabildos, modificando y alterando sus proyectos de vida, de sociedad y de comunidad.

Al respecto dice Myriam Jimeno¹³, en su artículo *Los indígenas colombianos hoy, por su situación real, problemas y alternativas*: “La política agraria desde 1961 se dirigió a crear nuevas condiciones en el campo, a través de una ley de reforma agraria y de un nuevo instituto, el Incora, para ponerla en marcha. A pesar de la precariedad de la política agraria para reestructurar la propiedad territorial y modificar su concentración, la ideología de la modernización cobró fuerza y con ella se hizo posible que en algunos sectores oficiales se abrieran reivindicaciones indígenas sobre legalización territorial. Durante los años setenta y con base en la ley 135 de 1961

¹² Martha Bello, “El desplazamiento forzado en Colombia: Acumulación de capital y exclusión social”, en Globalización, migración y derechos humanos, Quito, Ecuador, 2003. Universidad Andina Simón Bolívar, Programa Andino de Derechos Humanos.

¹³ Myriam Jimeno S, “Los indígenas colombianos hoy. Por su situación real, problemas y alternativas”, en *Revista Credencial Histórica*. Edición 33. Bogotá, Colombia 1992

(ley de Reforma Agraria), se inició el reconocimiento legal de tierras a grupos indígenas, cada día más activos en sus reclamos. Hasta 1961 sobrevivían del antiguo régimen colonial de tierras, en forma de resguardos de indios, 81 resguardos, sobre un área de 400 mil hectáreas y una población estimada de 157 mil personas. Casi todas ellas se situaban en el suroccidente andino. Luego, principalmente en la década del 70, los reiterados reclamos de tierra de poblaciones indígenas y los conflictos tanto en las áreas periféricas sujetas a un proceso de colonización como en las mismas zonas andinas, llamaron la atención sobre la necesidad de dotación y legalización de tierras a indígenas. En desarrollo de la ley de Reforma Agraria, se adoptó como forma de asignación de nuevas tierras a indígenas en zonas marginales, especialmente en la llanura amazónica, la figura jurídica de las reservas. Parecía una medida intermedia entre el resguardo como propiedad de un grupo social y la carencia de reconocimiento legal. Bajo esta figura se crearon 158 unidades territoriales entre 1965 y 1986, sobre un área de 12 millones y medio de hectáreas, para 128 mil personas. Pese a la magnitud de los terrenos reconocidos como reservas indígenas, casi su totalidad se encuentra fuera de la frontera agrícola, en su mayoría en la región amazónica, y provienen jurídicamente del régimen de baldíos a cargo de la Nación”

En la actualidad las nuevas disposiciones fitosanitarias para la producción de lácteos y panela, implementadas hace unos años atrás, que desestimulan la producción, criminalizan los modos de procesamiento e impiden la comercialización de éstos productos. Disposiciones que corresponden a intereses meramente económicos, extranjeros, o de tratados de libre comercio, pro industrialización y comercialización de productos importados, aislando aún a éstas comunidades.

En el caso de las comunidades indígenas, por ejemplo en 1863, declarada Colombia como Estado Federal, “Estados Unidos de Colombia” por el liberalismo radical, Tomás Cipriano de Mosquera, se decreta “*la ley de desamortización de bienes de manos muertas*¹⁴”, luego y en el marco de la *Constitución Río Negro*, se infiere en el desmembramiento de las poblaciones, más absorción y por completa la invisibilización a sus territorios, cultura y en general la negación de su existencia, bajo el proyecto de

¹⁴ Ley de desamortización de bienes en manos muertas: Ley que consiste en quitarle las tierras a indígenas e iglesia, porque en el concepto del Estado no eran productivas, para ser manejadas por el mismo Estado, la Gobernación y en algunos casos la Universidad del Cauca.

homogeneización de la nación. En *La Constitución de los Estados Unidos de Colombia*¹⁵, los artículos 2, 4 y 5. Todo lo anterior es un claro indicador de violencia sostenida y perpetrada por el Estado directamente sobre sus propias poblaciones.

Más adelante, en 1890, desde la ley 89¹⁶ se promueve “la civilización de los salvajes por medio de iglesia”, se supone que deben irse *reduciendo*. Con la cual legitima la muerte y masacre de los pueblos indígenas, salvaguardando el proyecto de construcción nacional, asistiendo sobre los indígenas un reconocimiento falso¹⁷ (Categoría planteada por Charles Taylor “La proyección sobre el otro es de una imagen inferior o humillante, que puede en realidad deformar y oprimir hasta el grado de que esa imagen sea internalizada”).

Explica José Arrueta: “... los Estados no negaron la presencia indígena, más bien su reconocimiento, desde su identificación como problema, propició políticas de homogeneización cultural por vía del mestizaje. El debate sobre todo en el marco del desarrollo económico, se centró en la polarización dicotómica entre modernidad y tradición, entendiéndose que las condiciones tradicionales de producción (consideradas precapitalistas) eran la causa que impedía el desarrollo y por lo tanto, el camino hacia la modernización de las sociedades latinoamericanas”¹⁸

¹⁵ Constitución política de los Estados Unidos de Colombia de 1863, artículos 2, 4,5. **Artículo 2.-** Los dichos Estados se obligan a auxiliarse y defenderse mutuamente contra toda violencia que dañe la soberanía de la Unión, o la de los Estados. **Artículo 4.-** Harán también parte de la misma nacionalidad los Estados Soberanos en que se dividan alguno o algunos de los existentes, conforme al Artículo que sigue, y los que, siendo del todo independientes, quieran agregarse a la Unión por Tratados debidamente concluidos. **Artículo 5.-** La ley Federal puede decretar la creación de nuevos Estados, desmembrando la población y el territorio de los existentes, cuando esto sea solicitado por la Legislatura o las Legislaturas del Estado o de los Estados de cuya población y de cuyo territorio deba formarse el nuevo Estado; con tal que cada uno de los Estados de nueva creación tenga cien mil habitantes, por lo menos, y aquellos de los que fueren segregados no queden con menos de ciento cincuenta mil habitantes cada uno

¹⁶ Ley 89 de 1890. Constitución Política Colombiana; Esta ley expresa Su estatus inferior de indígenas era así cobijado por la ley, mientras que los negros eran ignorados” En el artículo 2 de ésta ley se encuentra: La legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio de Misiones. En consecuencia, el Gobierno, de acuerdo con la Autoridad eclesiástica, determinará la manera como esas incipientes sociedades deban ser gobernadas. ... Las comunidades de indígenas reducidos ya a la vida civil tampoco se regirán por las leyes generales de la República en asuntos de resguardos

¹⁷ Charles Taylor, “El Multiculturalismo y La Política del Reconocimiento”, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1992.

¹⁸ José Antonio Arrueta, “Movimiento social, movimiento indígena”, en Universidad Mayor de San Simón, Universidad Indígena Intercultural (Fondo Indígena -GTZ) PROEIB Andes / Documento de trabajo de módulo 1.

Lo anterior, y sólo para ser mencionado, sin tener en cuenta las políticas de intervención transnacional, en seguridad y economía, que representarían otras formas de violencia simbólica y colectiva, así como las agresiones y persecución del movimiento indígena, de sus dirigentes, como de sus poblaciones en general cuándo los territorios por ellos ocupado obstaculizan proyectos económicos transnacionales, dado que los masacran, persiguen o desplazan. O cuándo por las demandas, manifestaciones y movilizaciones en procura de reivindicaciones y resarcimiento de daños históricos acaecidos en estos grupos sociales asistidos, son más atacados y perseguidos, y criminalizados o bien no se toman en cuenta.

1.1 Víctimas y normatividad

Ahora bien, dado que Colombia¹⁹ sostiene distintas formas de violencia, ha concentrado la atención de distintos gobiernos en la pretensión de solucionarlo en el mejor de los casos, o bien de minimizar los efectos del mismo, finalidad para la cual se han implementado distintas fórmulas legales y políticas.

Estas leyes en general tienen como cometido viabilizar la consecución de la paz, y mitigar los efectos del conflicto. Entre éstas, algunas leyes brindan beneficios a los victimarios, buscando lograr su desmovilización y reintegración a la sociedad civil, en otros casos se prioriza en la atención y reparación a las víctimas, por cualquiera de las partes del conflicto.

La Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz²⁰, tramita la reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la

¹⁹ “Colombia continúa inmersa en un conflicto armado interno complejo y de múltiples facetas... persisten las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los distintos grupos armados y la fuerza pública...” Aparte del contexto en el “Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia” Naciones Unidas, 19 de febrero de 2009.

²⁰ Ley 975 de Julio de 2005. Fiscalía General de la Nación, Relatoría Unidad de Justicia y Paz. Consultado en http://www.fiscalia.gov.co:8080/justiciapaz/Documentos/LEY_975_concordada.pdf

consecución de la paz nacional, dentro de la misma se encuentran algunas disposiciones para lograr acuerdos humanitarios. En el marco de ésta ley se consideran víctimas a la población civil, fuerza pública o personas jurídicas por hechos perpetrados por Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley que se hayan desmovilizado y postulado a la aplicación ésta. Es decir, se depende del victimario para el reconocimiento de la víctima, porque en relación con la declaración del agresor, se identificarán quienes han sido afectados por él; además, bajo la condición de que quiera acogerse a ésta ley, y que en efecto narre cuáles fueron los hechos. Entonces, qué garantías de reparación tienen las víctimas?

Respecto de la Ley 1424 de 2010 o Ley de desmovilizados²¹, aborda disposiciones de justicia transicional, las cuales den garantía sobre la verdad, justicia y reparación a las víctimas de los desmovilizados; concediendo a ellos (victimarios) beneficios judiciales. Se pretende por medio de esta ley, contribuir a la paz; según su artículo 1º; nuevamente desde el victimario, cuando este resuelva desmovilizarse; lo cual deja a las víctimas sin garantía alguna de ser realmente reparada y restituida; porque el proceso que se lleve a cabo depende de la versión de los hechos dada por el victimario; y a este último; se pretende reintegrarlo a la sociedad. La pregunta que cabe entonces es; qué reparación tendría una víctima; considerando que su situación se define como tal – víctima – cuándo el agresor lo declare, y por otro lado devuelven a la sociedad a dichos agresores luego de pagar penas carcelarias irrisorias que indignan a sus agredidos, por un lado, y por el otro se siente la amenaza constante de agresor libre.

²¹ Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración – ODDR – Universidad Nacional. “Ley 1424: Antecedentes, contexto y aplicación en el ámbito de la justicia transicional en Colombia ” Bogotá Marzo, 2012. Consultado en http://www.observatorioddr.unal.edu.co/productos_academicos/nuevos/ley1424de2010_antecedentes_contextoyaplicacion_en_el_ambito.pdf Diciembre de 2012

- También consultado en http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1424_2010.html, enero de 2013

Luego de tantos paleativos que pretenden “corregir” los errores de los victimarios, en cualquiera de las partes del conflicto en Colombia; emerge normatividad que se plantea a partir de la situación de vulneración de las víctimas; así siguen generándose nuevas estrategias, que viabilicen la atención y reparación de éstas.

Surgen entonces el decreto 1290 de 2008²², según el cual se crea el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley. Para éste decreto serán consideradas víctimas; la población civil o fuerza pública que hay sufrido hechos perpetrados por Grupos armados organizados al margen de la ley y para ellos; aplica beneficios económicos según el hecho victimizante sufrido, es decir; según sea su dolor y daño vividos, el Estado asigna una cantidad de dinero reparar su duelo. La pregunta que me atañe es; en el entendido de que la víctima ha aceptado una “indemnización”, pero para ello debe someterse a una serie de trámites, de largas filas, de inacabables requisitos y señalamientos; dicha reparación no es tanto o más indignante que ser víctima del conflicto en sí?

Luego de varias críticas, se implementa “la Ley 1448 de 2011 – Ley de atención a víctimas y restitución de tierras”²³ como el mecanismo legislativo novedoso por medio de la se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

Para el funcionamiento de dicha ley, el gobierno define unas estructuras de atención especial y exclusiva para la atención de las víctimas, las cuales se denominan Unidades Territoriales para la atención y reparación integral de víctimas – UARIV²⁴ – a nivel

²² Decreto 1290 de abril de 2008. Consultado en <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/6261> Diciembre de 2012

²³ Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Ministerio del Interior y de Justicia. República de Colombia. 2011

²⁴ “Centros especializados para la atención a víctimas. “Desde la Unidad se busca coordinar de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica las acciones de las diversas entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas - SNARIV” <http://www.atencionyreparacion.gov.co/84-noticias-unidad/102-asiste-a-poblacion-afectada-por-la-violencia-en-el-departamento-del-cauca> Consultado en Diciembre de 2012

nacional, éstas trabajan en común acuerdo con el Ministerio del Interior y de Justicia. Para la atención local de esta población vulnerable con prioridad, se nombraron en las administraciones municipales los *Enlaces*, quienes tienen la función de brindar el apoyo y la debida atención a las víctimas en todos los aspectos, ésta oficina trabaja en común acuerdo y articulación con las Unidades territoriales regionales de cada departamento y cada administración.

Según ésta ley, son víctimas las personas naturales o jurídicas, que individual o colectivamente hayan sufrido violaciones a los Derechos Humanos o Infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado interno. Por hechos acaecidos entre el 1 de Enero de 1985 y el 10 de Junio de 2021, para restitución de tierras será hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1991. La reparación se pretende de manera integral, por ende entrega una reparación administrativa o pecuniaria, así como atención psicológica, agrega programas de recreación de tiempo libre, reunificación familiar, y de restitución de tierras, ésta última por medio de la solicitud de retorno que emite la víctima.

Todo lo anterior, parecería ser la solución y vía de atención de ésta población en situación de alta vulnerabilidad; sin embargo una de las primeras fallas es la falta de recursos para su debida articulación; porque el gobierno nacional legisla y determina las obligaciones de atención tanto municipal como departamental, pero no aporta económica ni estructuralmente en su aplicación, por un lado. De otro lado; tampoco descongestiona el sistema de atención por medio del cual las víctimas deben ser asistidas; así, pueden pasar años sin que una persona que haga la declaración en una entidad del ministerio público; reciba una respuesta o cambie en algo su situación. Ahora bien, por si fuera poco; la formulación de ésta ley, no tuvo en cuenta en su elaboración las voces de quienes serían sus beneficiarios, es decir; no atiende a las necesidades reales de la población que asiste.

Conclusiones

Todo este tipo de legislación y normatividad transicional, se genera al considerarse como terminado un conflicto, y por ende en apertura de cambios sociales, políticos, económicos, culturales y hasta identitarios de un país. No es en el caso de Colombia, convirtiéndose así en un caso particular; porque aún está en medio del conflicto, y la cifra de víctimas por atender no tiene definición, por ende no se sabe qué debe suplir dicha legislación. Esta cifra día a día se incrementa, y la vulnerabilidad de la población en general aumenta también.

Ahora bien, considerando la descripción realizada, me atrevo afirmar que la violencia una forma de hacer política en Colombia, en tanto el terror, miedo y control que ésta ejerce sobre las víctimas, indudablemente influye en la construcción socio política nacional. Además perfila y modela no sólo la actuación, sino también el lugar y los roles que unos y otros actores deban ocupar y ejercer.

Teniendo en cuenta que la violencia se ha extendido en la totalidad de territorio colombiano, su accionar y constancia han construido muros irrompibles de contención y tensión social, aplica la descripción de James Scott, para el caso nacional “Es el hecho de que la sumisión forzada no solo no produce las actitudes que servirán para mantener esa sumisión cuando la dominación deja de ejercerse, si no que produce una reacción en cadena en contra de dichas actitudes. ...es que las creencias y las actitudes individuales tienden a reforzar la sumisión ante los deseos de los poderosos si, y solo si, se percibe esa sumisión como resultado de un libre elección, de un acto voluntario”²⁵

Es posible también notar en la descripción de la violencia en el caso colombiano, que por medio de una constante vulneración de los derechos, la dignidad y la vida de amplios sectores de la población, se sostenido la dominación social, política y económica. Y frente a los conatos de rebelión, revolución hay opresión y represión total del Estado colombiano por medio de sus instituciones, es decir del ejercicio monopolístico de violencia, que no solo es aplicado a actores

²⁵ “Scott James, “Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos”, en J. Aguilar Mora (trad), 2da reimpresión, México, Ediciones Colección Problemas México Ediciones Era, 2007

sociales que ponen en riesgo la estabilidad y legitimidad de la nación, sino también de sectores de la población que interfieren en los proyectos económicos de quienes gobiernan el país.

Así, en este contexto, al preguntarse a) qué garantías de reparación tienen las víctimas?, b) dicha reparación no es tanto o más indignante que ser víctima del conflicto en sí?, c) qué reparación tendría una víctima; considerando que su situación se define como tal – víctima – cuándo el agresor así lo declare.

Considero de manera personal (pese a todo lo implementado), que en definitiva; a) no hay garantías de reparación, b) se pretende sostener la sumisión de la población en general frente a gobiernos y líderes, al sistema en sí, y al Estado como tal, c) es el mayor de los agravios para las víctimas, depender de su victimario para tener credibilidad; además indignante y deformante por completo anulador para la víctima; así están siendo asistidos con reconocimiento falso (Categoría de Taylor). En tanto según las declaraciones del victimario, se procede en cada caso; además las penas para los agresores son irrisorias, estimulando así el duelo, la rabia y profundo dolor en las víctimas directas e indirectas.

Bibliografía

- Charles Taylor, “El Multiculturalismo y La Política del Reconocimiento”, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1992.
- Constitución política de los Estados Unidos de Colombia de 1863
- Constitución Política de Colombia. 1991
- Decreto 1290 de abril de 2008. Consultado en <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/6261> Diciembre de 2012
- Enrique Neira, “Colombia un caso intrincado de violencia”, Revista Nueva Sociedad N° 105, 1990. Consultado en http://www.nuso.org/upload/articulos/1840_1.pdf, en Marzo de 2011
- Gonzalo de Francisco; “El plan Colombia y la Paz”, consultado Junio de 2011, en http://www.ideaspaz.org/eventos/download/haciendo_paz_02.pdf
- Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia” Naciones Unidas, 19 de febrero de 2009.
- James, Scott “Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos”, en J. Aguilar Mora (trad), 2da reimpresión, México, Ediciones Colección Problemas México Ediciones Era, 2007

- José Antonio Arrueta, “Movimiento social, movimiento indígena”, en Universidad Mayor de San Simón, Universidad Indígena Intercultural (Fondo Indígena -GTZ) PROEIB Andes / Documento de trabajo de módulo 1.
- Ley 418 de Diciembre de 1997. Congreso de Colombia. Consultado en http://www.unp.gov.co/docs/decretos/ley_418_97.pdf Diciembre de 2012
- Ley 975 de Julio de 2005. Fiscalía General de la Nación, Relatoría Unidad de Justicia y Paz. Consultado en http://www.fiscalia.gov.co:8080/justiciapaz/Documentos/LEY_975_concordada.pdf
- Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Ministerio del Interior y de Justicia. República de Colombia. 2011
- Martha Bello, “El desplazamiento forzado en Colombia: Acumulación de capital y exclusión social”, en Globalización, migración y derechos humanos, Quito, Ecuador, 2003. Universidad Andina Simón Bolívar, Programa Andino de Derechos Humanos.
- Myriam Jimeno S, “Los indígenas colombianos hoy. Por su situación real, problemas y alternativas”, en Revista Credencial Histórica. Edición 33. Bogotá, Colombia 1992
- Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración – ODDR – Universidad Nacional. “Ley 1424: Antecedentes, contexto y aplicación en el ámbito de la justicia transicional en Colombia ” Bogotá Marzo, 2012. Consultado en http://www.observatorioddr.unal.edu.co/productos_academicos/nuevos/ley1424de2010_antecedentes_contextoyaplicacion_en_el_ambito.pdf Diciembre de 2012
- Romero; Mauricio Ed., “*Parapolítica, La Ruta de la expansión paramilitar y acuerdos políticos*”, Primera Edición, Editorial Corporación Nuevo arcoíris, Cerec, Asdi 2007.
- Taylor; Charles. *El Multiculturalismo y La Política del Reconocimiento*. Ed. Fondo de Cultura Económica. 1992.
- Tilly Charles; “La violencia colectiva”, Ed Hacer, Madrid 2007
- Varios Autores; “I. La política de defensa y seguridad democrática”, en Política de Defensa y Seguridad Democrática, Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, República de Colombia 2003, consultado Junio de 2011 en http://www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf”.
- Páginas web
<http://www.aporrea.org/internacionales>
<http://diplomadoddhhyca.jimdo.com/>
www.cedema.org
www.movimientodevictimas.org/
www.nuevoarcoiris.org.co